

# Historias No Contadas

*Amenazados por todos los actores del conflicto, los medios de Colombia se autocensuran.*

**Por Chip Mitchell**

**MONTERIA, Colombia**

El principal sospechoso en el asesinato de Orlando Benítez nunca se puso en duda. Benítez, un legislador aquí en el departamento noroccidental de Córdoba, se preparaba para presentarse como alcalde de un municipio controlado durante años por Diego Murillo Bejarano, jefe paramilitar conocido como “Don Berna”. Murillo, quien estuvo estrechamente vinculado con el narcotraficante Pablo Escobar, no había visto la campaña con buenos ojos.

Con base en un informe policial, la prensa local y nacional informó resumidamente del ataque, en el cual cinco hombres asesinaron a balazos a Benítez, a su hermana y a su chofer el 10 de abril. Sin embargo la prensa no hizo mención a Murillo ni sometió el triple asesinato a investigación significativa. “Ningún periodista trató de averiguar lo que todos sospechaban”, comenta Gustavo Santiago, director de noticias para la filial de Caracol Radio en Montería, la capital departamental. “Esto te cuesta la vida”.

Se requiere temple para ser periodista en esta nación andina, dividida durante décadas por una guerra que enfrenta al gobierno y las fuerzas paramilitares con las guerrillas, por oscuras organizaciones internacionales que posibilitan que Colombia suministre una gran parte de la cocaína y heroína que se consume en el mundo, y por una cantidad de grupos clandestinos que controlan el contrabando, extorsionan a las empresas y manipulan a funcionarios públicos.

---

*Chip Mitchell es periodista radial y escritor radicado en Bogotá. Frank Smyth del Comité para la Protección de los Periodistas colaboró para este informe desde el departamento suroccidental de Valle del Cauca.*



Santiago Pérez

**Periodistas en la zona de Sucre entrevistan a un jefe paramilitar conocido como Ernesto Báez. Los paramilitares se están desmovilizando, pero los periodistas dicen que las amenazas continúan.**

En este caso, los medios temieron una represalia no solamente de parte de Murillo, quien insiste en que no tuvo nada que ver con el asesinato, sino también del gobierno del Presidente Álvaro Uribe, quien había suspendido las órdenes de captura del comandante como parte de negociaciones para desmovilizar a los paramilitares. Las conversaciones se habían dilatado por más de dos años, últimamente en una “zona de ubicación” paramilitar que el gobierno estableció a unos pocos kilómetros de donde se produjera el asesinato. El nombrar a Murillo como sospechoso habría puesto la atención en las violaciones al “cese de fuego” que los paramilitares declararon para las conversaciones. Y esto habría alimentado las críticas internacionales a la legislación respaldada por Uribe que otorgaba indulgencia judicial a los paramilitares que dejaran las armas.

Dos semanas después del asesinato, las autoridades finalmente rompieron el silencio, al anunciar una reciente orden de arresto para Murillo. Incluso en ese momento, pocos medios investigaron el supuesto rol del jefe paramilitar en profundidad. Uno de los temores, apunta Santiago, era que los periodistas tuvieran que terminar testificando en contra de Murillo.

Una investigación del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) halló que este tipo de actitud no intervencionista prevalece hoy en Colombia. Entrevistas con decenas de periodistas demuestran como los medios y los reporteros en todo el país se autocensuran por temor a sufrir represalias físicas de parte de todos los actores armados en el conflicto.

Al menos 30 periodistas colombianos fueron asesinados en la última década en cumplimiento de su labor informativa. “Amamos nuestra profesión, pero somos humanos”, afirma Carmen Rosa Pabón, directora de noticias de Voz de Cinaruco, una filial de Caracol Radio en la ciudad nororiental de Arauca. “Las amenazas y los asesinatos nos dan miedo. Para sobrevivir, tiene que limitarse”.

En ciertas ocasiones, una noticia verificada se elimina poco antes de su transmisión o publicación. En otros casos, los periodistas que investigan son asesinados o detenidos, o se ven forzados a huir. A menudo, las investigaciones nunca llegan a iniciarse. Las cuestiones que se tapan son los abusos a los derechos humanos, el conflicto armado, la corrupción política, el narcotráfico, y las vinculaciones de los funcionarios con los grupos armados ilegales. Los periodistas terminan enfocándose en cambio en “temas agradables como la fauna y la flora”, comenta Angel María León, jefe de noticias para la filial de RCN Radio en Arauca.

Las comunidades pagan un precio elevado. “Una región sin un periodismo investigador va a tener impunidad”, sostiene Jaime Vides Fera de Radio Caracol en Sincelejo, una capital departamental cercana a la costa del Caribe.

Y la autocensura tiene dimensiones internacionales. El gobierno de Uribe, por ejemplo, presiona para que Estados Unidos y Europa financien con 300 mil millones de pesos (130 millones de dólares estadounidenses) un plan para reinsertar a los paramilitares a la vida civil. Sin embargo, los contribuyentes extranjeros apenas están en condiciones de decidir si el plan conduciría a la paz siendo que la prensa no se atreve a investigar el tráfico de drogas por los paramilitares ni sus ataques a civiles.

“Se trata de masacres en serie—muertes extremadamente crueles con tortura”, apunta la reportera Beatriz Diegó Solano



AP/Luis Benavides

**Cientos de combatientes paramilitares de una facción conocida como “Héroes de Granada”, se reúnen para una ceremonia de desmovilización en Cristales, en el mes de agosto.**

de *El Universal*, un diario que restringió su investigación acerca de docenas de sepulturas sin nombre descubiertas cerca de Sincelejo este año. “¿Tú crees que estas personas van a dedicarse a sembrar maíz? Son psicópatas”.

Los principales grupos guerrilleros de Colombia—las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el más reducido Ejército de Liberación Nacional (ELN)—se formaron a mitad de los años ‘60, instando al socialismo en nombre de una mayoría empobrecida del país. Sin embargo las guerrillas se ganaron su reputación por el abuso a los derechos humanos al usar tácticas como la extorsión, el secuestro, y el asesinato. Y las FARC, ahora con una fuerza de más de 15 mil personas, generaron una gran parte de sus ingresos cobrándoles “impuestos” a los campesinos que cultivan la coca, materia prima para la elaboración de la cocaína.

A principios de los años '80, ganaderos, oficiales de las fuerzas armadas, narcotraficantes y empresarios crearon ejércitos privados regionales para defenderse de la guerrilla. Pero los paramilitares, apodados "autodefensas", se concentraron mayormente en movimientos sociales que no estaban armados. A menudo trabajando codo a codo con las fuerzas del gobierno, asesinaron a miles de líderes campesinos, sindicalistas, políticos, defensores de los derechos humanos, y a otros civiles acusados de respaldar a la guerrilla. Y han tenido un papel preponderante en convertir al narcotráfico en el sector exportador más importante de Colombia.

Desde que el gobierno de Uribe comenzó a negociar con ellos en el 2002, los paramilitares en apariencia han desmovilizado unidades, llegando a un total de 8500 de sus 20 mil combatientes. Al mismo tiempo, no obstante, se han expandido y afianzado sus operaciones ilegales que van desde la extorsión hasta el tráfico de drogas y el contrabando de gasolina. Actualmente ejercen influencia sobre municipios, gobiernos departamentales, y agencias federales en todo el país. Alardean que poseen el control de un tercio del Congreso.

Las FARC, entretanto, siguen siendo poderosas. "Aquí hemos encontrado un terrorismo enseñoreado por décadas, un terrorismo escondido en las grandes ciudades y en más de 300 mil kilómetros [cuadrados] de selva, un terrorismo financiado por el narcotráfico", indicó Uribe en un discurso del año 2003. "No creo que en la historia de mi generación se haya tenido que enfrentar en el mundo un terrorismo más rico, más poderoso, un terrorismo más agresivo, más peligroso que el que hemos enfrentado en

Colombia. ¿Y cómo lo estamos enfrentando? De la mano de la Constitución. Lo estamos enfrentando sin recortar la libertad de prensa".

Mientras el gobierno colombiano ejerce poco control formal sobre los contenidos de las noticias, los funcionarios a menudo persuaden a los medios para que se autocensuren. En el 2000, la red de televisión Caracol envió al reportero Jorge Enrique Botero y a otros dos periodistas a un viaje de 11 días a un campamento secreto en el sur en donde las FARC mantenían a decenas de soldados y policías cautivos. Este material filmado fue la base para un documental de 43 minutos que justificó reclamos de los familiares en el sentido de que el gobierno se había olvidado prácticamente de los cautivos. Botero lo llamó "el reportaje más esperado en mi carrera".

Pero una carta de la Comisión Nacional de Televisión instó a Caracol para que desechara el trabajo, aduciendo que "lesionan gravemente los sentimientos de grandes núcleos de televidentes, como nuestra población infantil", y que "este tipo de emisiones podrían resultar contraproducentes" para los esfuerzos por la paz.

El documental nunca se puso al aire. Una declaración del Presidente de Caracol Ricardo Alarcón admitió la existencia de la carta pero dijo que la red noticiosa tomó su propia decisión, luego de "haber divulgado muchas de esas imágenes en el noticiero".

Otro modo en que los funcionarios alientan la autocensura es al acusar a los periodistas de mantener vínculos con la guerrilla. En Saravena, un pueblo en el departamento de Arauca, soldados pertenecientes a un batallón del Ejército llamado Grupo Mecanizado Revéiz Pizarro ingresaron a la

## En Sus Palabras

El Comité para la Protección de los Periodistas entrevistó decenas de periodistas colombianos. Esta es una muestra de temas que afirmaron investigarían de no ser por temor a represalias.

"En Sucre en los últimos años se ha desaparecido mucha gente, y no solamente por grupos paramilitares sino grupos de guerrilla. Comenzar a investigar esos temas puede ser muy delicado en cuanto a la seguridad".

**Jorge Velásquez Crespo**  
**Caracol Radio**  
**Sincelejo, Sucre**

"Un tema a investigar sería la corrupción de, por ejemplo, la plata de regalías [de petróleo] que se han robado por muchos años. Otro sería las tantas muertes que hay aquí en el departamento que

no se sabe de donde vienen. Investigaríamos todos los hechos si no nos callaran para siempre."

**Javier Sepúlveda Ramírez**  
**Kapital Radio**  
**Arauca, Arauca**

"Estaría investigando los vínculos de políticos con las autodefensas y la guerrilla, y el lavado de dinero que hacen ciertas personas y los mismos grupos".

**Jorge Eliécer Quintero**  
**Cuéllar**  
**Diario de Huila**  
**Florencia, Caquetá**

"Una cosa que no quiere tocar es narcotráfico. Incluso más peligroso es la corrupción. Los narcotraficantes al menos trabajan, pero un grupo de gente en el gobierno no".

**Alfredo Martín Rodríguez**  
**La Jota Estéreo**  
**Tuluá, Valle del Cauca**

"Hay mucho recelo de investigar a las grandes corporaciones. Yo no creo que sean matones, pero te pueden bloquear profesionalmente".

**Carlos Eduardo Huertas**  
**Semana**  
**Bogotá**

"Me gustaría reportar en el tema de los secuestrados que tiene la guerrilla ante la imposibilidad de hacer canje humanitario [por guerrilleros en manos del gobierno] o de hacer alguna negociación para que esta gente, por Dios, vuelva a sus casas. Me gustaría saber cual es la obcecación tanto del gobierno como de la guerrilla de poner a eternizar un sufrimiento de tal magnitud".

**Jorge Otero Martínez**  
**Cuarta Opinión**  
**Montería, Córdoba**





Damián Sarmiento

**Un fotógrafo en viaje con la Brigada 18 del Ejército apunta su cámara a los soldados que cargan los cuerpos de supuestos combatientes paramilitares en el Departamento nororiental de Arauca.**

radio comunitaria Sarare Estéreo el 21 de agosto del 2003 y arrestaron al único periodista que trabajaba tiempo completo, Emiro Goyeneche. Fue él una de las 19 personas arrestadas en el departamento ese día, imputado por “rebelión,” y acusado por la fiscalía de ser integrante del ELN.

La detención masiva fue parte de los esfuerzos del gobierno para aumentar la seguridad a lo largo de un oleoducto manejado por la empresa de Los Angeles, Occidental Petroleum. “Habíamos estado reportando del lanzamiento de cilindros [por guerrilleros], atentados a la fuerza pública, y decretos que restringían la movilidad de la gente, pero también de eventos deportivos y culturales y la vida cotidiana”, comenta Goyeneche, que a menudo filmaba material para Caracol TV además de su trabajo en la radio. “Siempre éramos respetuosos de la institucionalidad y el ámbito democrático”.

Los periodistas en la capital de Arauca elogian la labor de Goyeneche y dicen que las acusaciones en su contra fueron engañosas. Pero terminó en la cárcel durante más de 20 meses. La condena barrió con la programación de noticias de Sarare Estéreo, un golpe a un pueblo sin periódicos y sin ninguna otra estación de radio excepto la que manejaba el batallón.

Mireya Camacho, gerente de la emisora, y su reducido plantel han luchado para reanudar las noticias en medio de reiterados enfrentamientos con el Ejército. El año pasado, el batallón amenazó con clausurar la emisora por transmitir una reunión comunitaria acerca del asesinato de tres sindicalistas locales a manos de soldados. “Hay autocensura”, comenta Camacho. “No podemos pasar cualquier comunicado de organizaciones sociales que están legalmente constituidas sobre derechos humanos porque inmediatamente llegan las fuerzas militares a cuestionarnos”.

Entrevistado en mayo, el comandante del batallón, Coronel Luis Francisco Medina Corredor, sostuvo que muchas de esas organizaciones—nombró entre ellas al sindicato de docentes del pueblo y a su grupo más importante de derechos humanos—acatan órdenes del ELN. Pero insistió en que sus relaciones con Sarare Estéreo eran buenas: “No sé cual es el miedo”. El coronel dijo que Goyeneche, liberado en abril y aún a la espera de un fallo en su causa, está libre para trabajar en la emisora “desde que no se mezcle con grupos terroristas”.

Los comandantes militares en regiones remotas no son los únicos funcionarios que intentan vincular a los periodistas con la guerrilla. En febrero, el Vicepresi-

dente Francisco Santos fustigó los informes periodísticos que cuestionaban las políticas de seguridad del país como consecuencia de una escalada en los bombardeos de las FARC contra fuerzas gubernamentales. Los medios, señaló Santos, habían creado “una caja de resonancia a los hechos terroristas que, sin duda, fueron más efectivos que la misma utilización de explosivos”.

Jorge Otero Martínez, fundador del semanario de Montería *Cuarta Opinión*, dice que dichas declaraciones consiguen fines similares al de la censura formal. “El deber del periodista es dar la noticia, ser testigo de la época”, apunta. “Si atacan la Brigada 11 [del Ejército], ¿tenemos que callarnos la boca porque según el gobierno nacional eso nunca sucedió?”

Uribe, al hablar en una conferencia de ejecutivos de medios en marzo, los exhortó a que ejercieran “autocontrol” y consideraran excluir la publicación de entrevistas con integrantes de grupos armados ilegales. “Los terroristas mantienen un juego político muy peligroso”, aseguró. “Un día matan y al otro quieren ser personajes de la prensa”.

En una entrevista radial el 27 de junio, Uribe reprendió a un periodista en particular. Expresó que Hollman Morris, un reportero televisivo colombiano que había criticado los programas de seguridad del gobierno, había viajado al departamento sureño de Putumayo basándose en su conocimiento anticipado sobre ataques del 25 de junio perpetrados allí por las FARC, en los que murieron 25 soldados del Ejército. El argumento resultó ser falso: Morris, que trabajaba en un documental para la BBC, arribó después de los enfrentamientos. La oficina del presidente se retractó del reclamo, pero Morris dice que debió interrumpir su visita a Putumayo por temor a una represalia.

# Manos que Dan de Comer

Colombia quizás sea única en cuanto al grado de autocensura en la prensa por temor a sufrir represalias físicas. Poderosos factores económicos suman aún más presión.

El Grupo Empresarial Bavaria, con sede en Bogotá, fue acusado el año último de pagar 2 millones de dólares estadounidenses a un ex jefe de inteligencia peruano para que la compañía pudiera comprar la única empresa cervecera del Perú. Las autoridades peruanas están investigando las acusaciones, que Bavaria negó. “Era un escándalo internacional, y era el mayor conglomerado de Colombia”, apunta Carlos Eduardo Huertas de *Semana*. “Había mucha carne”.

Pero los medios colombianos no lanzaron sus propias investigaciones. En cambio, resumieron brevemente lo que había revelado la prensa peruana y sirvieron de plataforma para que el grupo Bavaria declarara su inocencia. La insulsa cobertura evitó problemas con uno de los anunciantes más grandes del país—una empresa que controlaba el mercado cervecero de Colombia y secundaba a pocos en la producción y la distribución de agua embotellada, jugos, bebidas con malta, y gaseosas. Bavaria, comprada por SABMiller este año, presentó demandas por difamación en contra de periodistas peruanos que divulgaron la nota.

Fuera de las ciudades más grandes de Colombia, la mayor parte de los ingresos en el sector de medios no proviene de las corporaciones sino de las agencias departamentales y municipales, que publicitan todo desde los horarios de mantenimiento de acueductos hasta programas de salud y educación. En el departamento sureño de Caquetá, Jorge Eliécer Quintero Cuéllar de *Diario de Huila* recuerda lo sucedido este año después de que escribiera dos informes poco halagadores sobre el Gobernador Juan Carlos Claros Pinzón: “Llamó el gobernador directamente a nuestra oficina y canceló los contratos que [el departamento] tenía vigente con nosotros”. Quintero Cuéllar afirma que el retiro de la publicidad no desalentó su labor informativa y que el jefe de ventas local del diario logró restablecer los contratos un mes más tarde.

Pero dicha manipulación sucede con frecuencia. En ciudades pequeñas e inclusive en las capitales departamentales, el personal disponible en las empresas de medios es generalmente tan limitado que los periodistas son responsables de la venta de avisos, lo cual los coloca en la posición insostenible de tener que informar sobre los mismos políticos que dan de comer a sus familias. Quintero Cuéllar describe los resultados en Florencia, la capital de Caquetá: “Uno escucha la radio y

mueve el dial. La misma noticia por una emisora es positiva y, por otra emisora, negativa. No hay un equilibrio. No hay objetividad”.

Algunos jefes de medios exigen pagos por la cobertura informativa, haciendo imposible que su equipo periodístico informe de un modo objetivo. “El dueño llama al gobernador o al alcalde y dice, ‘Déme un millón de pesos [435 dólares estadounidenses] y seguimos trabajando””, explica Javier Sepúlveda Ramírez de Radio Kapital, en el departamento nororiental de Arauca.

La presión es similar cuando los mismos dueños de medios están metidos en política. Muchos medios son propiedad de actuales o anteriores gobernadores, alcaldes, o miembros del Congreso. Otros medios, inclusive filiales de importantes cadenas, son propiedad de la Iglesia Católica, que toma partido en cuestiones públicas y tiene contratos educativos del gobierno. “Es imposible pelear con el dueño”, comenta Jaime Vides Feria, reportero radial en la ciudad noroccidental de Sincelejo.

La familia dueña de *El Tiempo*, el diario más grande del país, incluye al Vicepresidente Francisco Santos, que fue jefe de redacción a lo largo de los años '90, y a su primo, el ex Ministro de Hacienda Juan Manuel Santos. Las notas editoriales del diario han respaldado las políticas militar y económica del Presidente Álvaro Uribe, y la reforma constitucional que, en caso de ser aprobada por el máximo tribunal del país, le permitirá a Uribe ir en busca de un segundo mandato por cuatro años el próximo año. El codirector Enrique Santos, otro primo del vicepresidente, insiste en que la posición editorial del diario no tendrá repercusión en la información sobre la campaña. “No va a influir para nada el equilibrio”, indicó en una entrevista radial el 29 de agosto.

Algunos analistas no están convencidos. “Si quien firma los cheques piensa de tal manera”, enfatiza el columnista Daniel Coronell de *Semana*, “eso definitivamente socava el ánimo de cualquier periodista de elaborar cualquier trabajo que vaya en dirección contraria”.

Otro factor que alienta la autocensura está dado por magros salarios. La mayoría de los periodistas colombianos que trabajan tiempo completo ganan menos de 800 mil pesos (350 dólares estadounidenses) por mes, y algunos inclusive ganan menos que el salario mínimo establecido en el país de 381 mil pesos (165 dólares). “Cualquier día, tu trabajo ha dañado la imagen de alguien, y todo el país está hablándolo”, indica Beatriz Diegó Solano de *El Universal* de Sincelejo. “Pero todavía tienes que ir a pie solo para tu casa porque no tienes plata para carro ni escolta”.

—Chip Mitchell

**E**l número de ataques a periodistas colombianos pudo haber disminuido en los últimos años, pero el país sigue siendo uno de los lugares más peligrosos para reportar noticias. Este año, al menos un periodista fue asesinado debido a su labor periodística, varios otros sobrevivieron ataques a sus vidas, y muchos otros denunciaron haber recibido amenazas.

El asesinado Julio Hernando Palacios Sánchez, de la ciudad nororiental de Cúcuta, conducía un programa en Radio Lemas que periódicamente se enfocaba en casos de corrupción local. Dos hombres no identificados en una motocicleta abrieron fuego sobre él mientras conducía su auto en dirección a su trabajo el 11 de enero.

Seis explosiones este año dañaron instalaciones de medios noticiosos. El peor ataque se produjo el 20 de febrero con un coche bomba que destruyó el edificio donde se alojaban las emisoras de radio y televisión RCN en la ciudad de Cali, al sudoeste del país. Las FARC se adjudicaron la responsabilidad del hecho cuatro días después.

El 16 de mayo, tres periodistas conocidos en todo el país, cuya labor a menudo arrojó una visión desfavorable sobre el gobierno de Uribe, recibieron coronas fúnebres con tarjetas para sus propios entierros. Uno de ellos, Daniel Coronell, recibió también mensajes por correo electrónico amenazando de muerte a su hija de 6 años. Coronell, que dirige un programa de noticias en la cadena de televisión Canal Uno y escribe una columna para la revista *Semana*, rastreó los mensajes hasta una computadora en la mansión de Bogotá del ex congresista Carlos Náder Simmonds, un amigo cercano de Uribe. Náder negó haber enviado las amenazas pero admitió que habían salido de su computadora. Una investigación de la Fiscalía aún no ha arrojado ningún indicio al respecto.

La falta de seguridad se debe en gran medida al sistema judicial de Colombia, descrito en un informe del mes de febrero por el Departamento de Estado de Estados Unidos como "sobrecargado, ineficiente y sujeto a intimidaciones y corrupción". La ineficiencia, como mínimo, ha detenido varios casos que involucran a periodistas. Dos soldados del Ejército fueron condenados por el asesinato en 1991 de Henry Rojas Monje, corresponsal en Arauca para el matutino de Bogotá *El Tiempo*. Se le ordenó al Ministerio de Defensa que pagara más de 50 millones de pesos (20 mil dólares estadounidenses) a su familia, pero el gobierno apeló el fallo. En agosto, casi 14 años después del asesinato, el presidente de un tribunal nacional de jueces en lo administrativo conocido como Consejo de Estado afirmó que los archivos con la evidencia del caso, que pesan más de 50 kilos, habían "desaparecido" y deberían ser reconstruidos. La familia no va a recibir un resarcimiento por el momento.

El año pasado la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), con sede en Bogotá, examinó 157 ataques a periodistas denunciados a las autoridades en años recientes. Un tribunal determinó que el acusado era culpable en sólo dos

del total de los casos. En uno de ellos—el asesinato en el 2002 de Orlando Sierra, director adjunto de un diario en la ciudad occidental de Manizales—el asesino recibió una larga condena a prisión, pero quienes habían ordenado el crimen no habían sido investigados. En el otro caso—el asesinato en 1999 del humorista político Jaime Garzón—el condenado como autor intelectual, el jefe paramilitar Carlos Castaño, desapareció el 16 de abril del 2004.

Algunos legisladores y defensores de los derechos humanos responsabilizaron de esta impunidad a infiltración paramilitar en el sistema judicial. A los meses de asumir su cargo en el 2001, según Human Rights Watch, el Fiscal General Luis Camilo Osorio despidió a 26 fiscales de



AP/Fernando Vergara

**El Presidente Álvaro Uribe saluda durante un desfile militar en Bogotá en el mes de julio. Junto a él el Comandante General de las Fuerzas Militares, Alberto Ospina, centro, y el Comandante de la Armada, Mauricio Soto.**

derechos humanos y promovió a muchos otros que terminaron enfrentando acusaciones por corrupción. *The Miami Herald* informó el último año que fiscales en las ciudades de Cúcuta y Medellín habían tolerado o bien participado en atrocidades paramilitares. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre una cantidad de casos separados en los cuales la Fiscalía ha tomado escasa o ninguna iniciativa en respuesta a las desapariciones o muertes de abogados, líderes sindicales, periodistas y otras prominentes figuras.

Osorio renunció en agosto pasado, pero es probable que no cambie la suerte de los periodistas con su reemplazante en el cargo, el anterior Viceministro de Justicia, Mario Iguarán, designado por la Corte Suprema por recomendación de Uribe. Osorio describe a Iguarán como su "clon". Resulta que Iguarán fue coautor de la legislación para la desmovilización de los paramilitares. La medida, respaldada por Estados Unidos y sancionada como ley por Uribe en julio, reduce sentencias a prisión y brinda recompensas en efectivo para los combatientes ilegales que depongan las armas. Uribe dice que dichos incentivos son

cruciales para la paz. “La ley es universal”, apuntó en un discurso en julio. “Es para guerrilleros y paramilitares”.

Pero los críticos de la ley—incluyendo a Human Rights Watch, Amnistía Internacional, y las comisiones de derechos humanos tanto de las Naciones Unidas como de la Organización de los Estados Americanos—advierten que la misma establece límites de tiempo en procesos judiciales que pueden permitir que algunos de los peores criminales paramilitares sigan en libertad. Los pocos condenados, dicen ellos, podrían cumplir sentencias de apenas dos años y mantener sus fuerzas intactas.

Este tipo de impunidad pesa mucho sobre los medios. En Florencia, una capital departamental al sur del país, los periodistas radiales Alfredo Abad López, Guillermo León Agudelo, y José Duviél Vásquez Arias fueron asesinados a



**Gustavo Santiago, director de noticias para la filial de Caracol Radio en Montería, afirma que una investigación sobre el asesinato del candidato para la alcaldía pudo haber costado la vida de los periodistas.**

lo largo de un período de ocho meses entre el 2000 y el 2001. “La Fiscalía no ha determinado a los responsables”, añade Carlos Meyer Sánchez, director de noticias de la filial local de RCN Radio. “Esto causa autocensura. Hay temas que no se puede tocar”.

**L**a autocensura surge en cada rincón del país pero con mayor intensidad en los medios regionales. “Vivimos aquí, nuestras familias viven aquí, y todos el mundo nos conoce”, afirma León, el reportero radial de Arauca. “No es lo mismo con periodistas que visitan unos días de Bogotá o con una agencia de noticias del exterior”.

Algunas de las noticias censuradas involucran la labor periodística de rutina. Meyer Sánchez recuerda una rueda de prensa en la cual la Brigada 12 del Ejército anunció que había capturado a un puñado de combatientes paramilitares. Agrega que un hombre externo al evento se presentó como el comandante de los detenidos y lo instó a que no hubiese ninguna información sobre el arresto “por su

seguridad y la seguridad de su familia”. Esa amenaza, agrega Meyer Sánchez, convenció a la emisora de que no debía transmitir nada sobre la captura.

*El Caleño*, diario de Cali, decidió no publicar una imagen de una víctima de asesinato en junio luego de que el fotógrafo recibiera una amenaza en su teléfono celular. “A veces es difícil ser un buen periodista debido al temor”, subraya Blanca María Torres Ramírez, directora adjunta del diario.

El 14 de julio, autoridades cerca de Medellín capturaron a José Aldemar (“Mechas”) Rendón Ramírez, con pedido de captura en Estados Unidos por las sospechas en el rol de supuesto financista del cartel de drogas del Norte del Valle. La prensa nacional e internacional cubrió el arresto, pero los medios de la ciudad suroccidental de Cartago—la comunidad donde Rendón se crió—pasaron por alto la nota. “Hay cosas sobre las que no podemos informar”, explicó Luis Angel Murcia de Cartago Estéreo el día después del arresto. “Tenemos miedo de las represalias”.

Como otra modalidad de autocensura, los medios abandonan investigaciones importantes. En abril y mayo, el periodista de *El Universal*, José Javier Sarmiento, obtuvo varias primicias sobre 72 tumbas sin nombre halladas en fincas en las cuales operaba el jefe paramilitar Rodrigo (“Cadena”) Mercado Pelufo. Sarmiento nunca recibió amenazas explícitas, indica, pero “muchas personas con conocimientos claros” de la unidad de Mercado Pelufo le hicieron saber que su labor informativa había ido demasiado lejos. “El periódico me dijo también que tenía que bajar el tono y no mencionar el dueño de la finca”, agrega, refiriéndose a su único informe que daba el nombre del propietario del predio de 2 mil hectáreas en donde había aparecido la mayoría de los cuerpos.

Diversos ángulos de información exigían una mayor investigación. Las autoridades, por ejemplo, no investigaban al dueño de la finca y no habían identificado a la mayoría de los cuerpos. Los habitantes del lugar indicaron que cientos de cuerpos seguían sin ser encontrados. Y Mercado Pelufo, buscado por diez casos de la masacre, gozaba de una suspensión de las órdenes de captura como parte de las conversaciones por la desmovilización. Sin embargo *El Universal* abandonó la nota. Juan Manuel Sánchez, que supervisó la edición de Sincelejo, reconoce el peligro que supone investigar a los paramilitares: “Tratamos de informar sin molestar a uno u otro grupo armado”. No obstante él insiste en que esta investigación murió por sí misma. El dueño de la finca “no tenía vínculos” con Mercado Pelufo, comenta, y los otros ángulos de la nota carecían de “fuentes confiables”.

*Semana*, la revista de actualidad más importante del país, publicó el año último una serie de artículos cuestionando las negociaciones sobre la desmovilización de los paramilitares. La cobertura informativa llegó a su pico con una transcripción de las cintas tomadas en la mesa de negociación que revelaban que el gobierno se había ofrecido a proteger a los jefes paramilitares de una posible





Danilo Sarmiento

**Hernán Morales, de Canal Cuatro, Rodrigo Ávila, de Caracol, y Carlos Pérez de RCN cubren la desactivación de explosivos en el centro de Arauca.**

extradición a Estados Unidos, en donde Murillo y muchos otros son buscados por acusaciones de narcotráfico. “Después de eso, no hubo una amenaza directa, pero hubo señales claras y fuertes de fuentes del bajo mundo para que tuviéramos cuidado”, dice Carlos Eduardo Huertas, coordinador de la unidad de investigación de *Semana*. Los artículos de la revista sobre las negociaciones se suavizaron. “La gente percibió el cambio”, agrega.

A medida que los periodistas se autocensuran, dependen más en fuentes gubernamentales. En Buenaventura, el puerto principal del Pacífico, 12 jóvenes jugadores de fútbol fueron masacrados el 19 de abril. Los periodistas locales se enteraron rápidamente de que los paramilitares habían acusado a dos de los jugadores de mantener vinculaciones con las FARC. “Todo el barrio sabía lo que había pasado, pero no podíamos publicarlo por miedo”, destaca Adonai Cárdenas Castillo, corresponsal del matutino de Cali, *El País*, apuntando que en los últimos 15 años una docena de periodistas han sido asesinados en Buenaventura. “Inclusive si uno sabe quién mató a alguien”, aclara, “sólo se puede publicar lo que informa la policía”. De modo tal que la prensa no brindó indicio alguno sobre quién fue responsable por la matanza hasta que las autoridades anunciaron el arresto de un combatiente paramilitar cuatro semanas después.

Cárdenas Castillo sostiene que la falta de información daña la credibilidad tanto del gobierno como de la prensa, aumentando la posibilidad de represalias violentas, especialmente en una ciudad como Buenaventura, que tiene un promedio de un asesinato por día entre sus 270 mil habitantes. “Si pudiéramos publicar lo que sucedió, frenaría la impunidad”, admite.

En la forma más extrema de autocensura, los periodistas hacen sus maletas y se van del país. Durante los esfuerzos estatales para proteger el oleoducto, casi todos los periodistas en Arauca huyeron del departamento. Varios acontecimientos desencadenaron el éxodo. El 28 de junio del 2002, supuestos paramilitares mataron a tiros a Efraín Varela, dueño y director de noticias de la emisora radial Meridiano 70. El 18 de marzo del 2003, otros dos supuestos paramilitares mataron a Luis Eduardo Alfonso, quien había reemplazado a Varela como director de noticias. Once días después del asesinato de Alfonso, una misteriosa lista nombraba a 16 periodistas locales como blancos de asesinato de la guerrilla o los paramilitares. “Todos estábamos en aviones a Bogotá dentro de unos días”, recuerda León, quien no regresó a Arauca por cinco meses.

“Las amenazas persisten contra nosotros”, añade León. La mayoría de los periodistas de Arauca limitan hoy su labor informativa a la capital departamental. Inclusive allí se mueven en grupos y rara vez pierden de vista a los guardaespaldas que les brinda el gobierno. “Es muy difícil para un periodista andar con un esquema como éste”, reconoce. “Cuando llegamos a un barrio con los escoltas, eso espanta a la gente”.

Las amenazas y los ataques han provocado el desarraigo de muchos otros periodistas. En abril, Angélica Rubiano huyó de Florencia, en donde trabajaba para la estación de radio local Cristalina Estéreo y para *La Nación*, diario de la cercana ciudad de Neiva. Por su investigación sobre operaciones de las FARC había recibido amenazas telefónicas y aparentemente una bomba en una antena usada por la emisora el 13 de marzo. “Era una de las mejores periodistas”, asegura el reportero Jorge Eliécer Quintero Cuéllar del *Diario de Huila*, un periódico de la competencia.

En julio, el director de televisión Julián Alberto Ochoa Restrepo huyó de Andes, un municipio en el departamento noroccidental de Antioquía, luego de un intento de asesinato el 23 de mayo y posteriores amenazas debido al rumor de haber colaborado en un informe periodístico nacional sobre corrupción en la zona. Un periodista televisivo de Buenaventura, Fanor Zúñiga Hurtado, abandonó la ciudad el 24 de julio después de meses de recibir amenazas de las FARC.

En el caso de Coronell, el temor por su hija de 6 años lo convenció de mudar a su familia fuera del país en agosto. Aceptó una beca en la Universidad de Stanford, solicitó una licencia en su programa televisivo, y obtuvo permiso de *Semana* para presentar su columna desde el extranjero. “Se han deteriorado las posibilidades para investigación”, se lamenta. “Pero la seguridad de mi hija es más importante”. ■